

**Consejo de Seguridad**

Distr. general  
29 de marzo de 2004  
Español  
Original: inglés

---

**Carta de fecha 19 de marzo de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo**

Tengo el honor de referirme a mi carta de fecha 9 de octubre de 2003 (S/2003/1008). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe presentado por Francia en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001), que se adjunta a la presente carta (véase el anexo). Agradecería a Vuestra Excelencia que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Inocencio F. **Arias**  
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad  
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)  
relativa a la lucha contra el terrorismo



**Anexo**

[Original: francés]

**Carta de fecha 17 de marzo de 2004 dirigida al Presidente del  
Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente  
de Francia ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de adjuntarle el cuarto informe complementario presentado por Francia al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice).

*(Firmado)* Jean-Marc **de La Sablière**

## Apéndice

### **Cuarto informe complementario presentado por Francia al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad**

Marzo de 2004

#### **1. Medidas de aplicación**

##### **Eficacia de la protección del sistema económico y financiero**

**1.1 Según lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución, todos los Estados deben reprimir la financiación del terrorismo. En el primer informe de Francia se indica (pág. 5) que los organismos financieros “tienen la obligación de comunicar a la red de información financiera en Francia las operaciones sospechosas que parezcan tener origen en el tráfico de drogas o en organizaciones delictivas”. En su segundo informe (pág. 4), Francia precisa que el derecho francés no establece sanciones de carácter penal por el incumplimiento de la obligación de declaración de sospecha y que “en caso de incumplimiento o de negligencia grave ... el TRACFIN, que no dispone de facultad sancionadora alguna, alertará a las autoridades responsables o a la instancia corporativa del profesional que haya incurrido en dicho incumplimiento o negligencia”. El Comité desearía saber si se han descubierto casos de incumplimiento de la obligación de declarar y si se han impuesto sanciones.**

1. Salvo concertación fraudulenta con el propietario de las sumas o el autor de la operación, si las personas sometidas a la obligación de declaración de sospecha cumplen tal obligación (véase *infra* la respuesta a la pregunta 1.5), quedarán exoneradas de eventuales procesos. Como se indica en el segundo informe de Francia al Comité, el derecho francés no establece sanciones de carácter penal por incumplimiento de la obligación de declaración. Por el contrario, cabe jurídicamente prever la incoación de un proceso, cuando se advierten tales incumplimientos, por inculpación de financiación del terrorismo o de blanqueo de dinero (o de complicidad con esos hechos). Sólo es posible el procesamiento en caso de concertación fraudulenta. Sin embargo, hasta la fecha no se ha incoado proceso alguno en Francia, ni se ha dictado sentencia, por estos hechos ni por estos motivos.

2. Además, el TRACFIN dedica gran parte de sus actividades a realizar acciones de sensibilización destinadas a profesionales sujetos a la obligación de declarar para ponerlos en condiciones de advertir, en su quehacer cotidiano, toda situación que pueda justificar la formulación de una declaración de sospecha, y recordarle las sanciones administrativas y judiciales a que se exponen.

Por otra parte, se ha creado por ley (Ley de 15 de mayo de 2001 relativa a la nueva reglamentación económica – artículo L.562-10 del Código Monetario y Financiero) un comité de enlace de la lucha contra el blanqueo de los productos de crímenes y delitos, copresidido por el TRACFIN y el Ministerio de Justicia. Integran este órgano, hasta la fecha, 30 miembros repartidos entre profesionales pertenecientes a todas las profesiones sujetas a la obligación de declarar, autoridades de control

y funcionarios de diferentes servicios del Estado (Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior).

La finalidad de dicho comité es garantizar una mejor información recíproca de sus miembros y presentar propuestas sobre las mejoras que cabe introducir en el dispositivo nacional contra el blanqueo de dinero. El comité, así como los grupos de trabajo anexos a él, sirve también para hacer resaltar ante los profesionales la importancia que tiene el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

La Comisión Bancaria está encargada, por su parte, de controlar el cumplimiento por los establecimientos de crédito, las empresas de inversión y los cambistas manuales de las disposiciones legislativas y reglamentarias que les son aplicables y de sancionar, llegado el caso, los incumplimientos comprobados. En tal concepto, la Comisión controla el respeto de las obligaciones de declarar al TRACFIN.

Para ello, la Comisión Bancaria utiliza un cuestionario anual que comprende preguntas relativas al dispositivo de detección de operaciones sospechosas y al número de declaraciones efectuadas. Por otra parte, la Comisión efectúa controles in situ, gracias a los cuales es posible verificar la existencia de procedimientos que permiten la detección y declaración de operaciones sospechosas, en particular mediante sondeos de las operaciones.

La Comisión realiza unas 200 investigaciones al año, y en 2001 y 2002 llevó a cabo 70 investigaciones concretas relativas a la prevención de la financiación del terrorismo. El artículo L.562-7 del Código Monetario y Financiero dispone que si, a raíz de una grave falta de vigilancia o de una carencia en la organización de sus procedimientos internos de control, un organismo financiero o una de las personas a que se refiere el artículo L.562-1 no ha cumplido las obligaciones que les corresponden a este respecto, la autoridad con poder disciplinario iniciará un procedimiento para comprobar si están bien fundamentados los reglamentos profesionales o administrativos e informará al Fiscal General del Estado.

En 2002 y en 2003 la Comisión Bancaria sancionó a 10 establecimientos de crédito, a 1 empresa de inversión, a 1 sociedad financiera y a 4 cambistas manuales por no haber presentado declaración de sospecha.

Se imputó un total de 100 faltas de declaración a esos establecimientos (56 en 2002 y 44 en 2003).

Las sanciones dictadas contra los establecimientos de crédito fueron recriminaciones acompañadas de multas de 50.000 a 228.673,53 euros (1.500.000 francos franceses). La empresa de inversión fue disuelta y se nombró a un liquidador. La sociedad financiera fue sancionada con una recriminación y multa de 50.000 euros. Los cambistas manuales fueron también sancionados con recriminaciones y multas de 20.000 a 37.500 euros.

Por otra parte, en ese mismo período, la Comisión Bancaria sancionó a otros 23 organismos financieros por otras deficiencias de su dispositivo de vigilancia.

**1.2 En lo que respecta a la represión de la financiación del terrorismo prevista en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución, el Comité desearía conocer la estructura del TRACFIN y saber de qué medios dispone (en los planos financiero y técnico) para poder cumplir su mandato.**

## Presentación general

El TRACFIN (*Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins*), creado en 1990 en el seno del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, es una red de información financiera, al estilo del Grupo Especial de Expertos Financieros, que tiene por misión principal luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Su labor consiste en la tramitación de las declaraciones de sospecha procedentes de organismos financieros y de diversas profesiones no financieras sujetas a la obligación de declarar (intermediarios inmobiliarios, responsables de casinos, comerciantes de bienes de gran valor, ...) que deben formularse cuando las cantidades inscritas en los libros de los profesionales o las operaciones relacionadas con ellas, pudieran provenir del tráfico de estupefacientes o de actividades criminales organizadas o servir para la financiación del terrorismo.

El TRACFIN fundamenta esta sospecha inicial evaluando la justificación económica de los flujos financieros y tratando de establecer un vínculo con un eventual entorno criminal o delictivo.

Para llevar a bien su misión, el TRACFIN dispone de poderes específicos:

- Puede manifestar su **oposición** a la ejecución de la operación declarada por una duración máxima de 12 horas. Este plazo puede ser prorrogado por el Presidente del Tribunal de instancia superior de París;
- Puede pedir la **comunicación** de todos los elementos y documentos relativos a una operación para reconstituir, tras haber recibido una declaración de sospecha, la totalidad de las transacciones efectuadas por una persona física o jurídica que estén vinculadas a la operación sospechosa.

Puede también proceder a intercambios de información con la Oficina central de represión de la gran delincuencia financiera (OCRGDF), la Aduana y las autoridades de control de las profesiones sujetas a la obligación de declarar, así como con los servicios extranjeros que ejerzan competencias análogas.

En contrapartida de los poderes que le son conferidos, el TRACFIN está obligado a ajustarse a normas de deontología y confidencialidad estrictamente definidas por la ley: las informaciones que se le comunican en declaraciones de sospecha no pueden ser utilizadas para otros fines que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ni comunicadas a otros interlocutores que los enumerados con carácter limitativo (véase el párrafo *infra*).

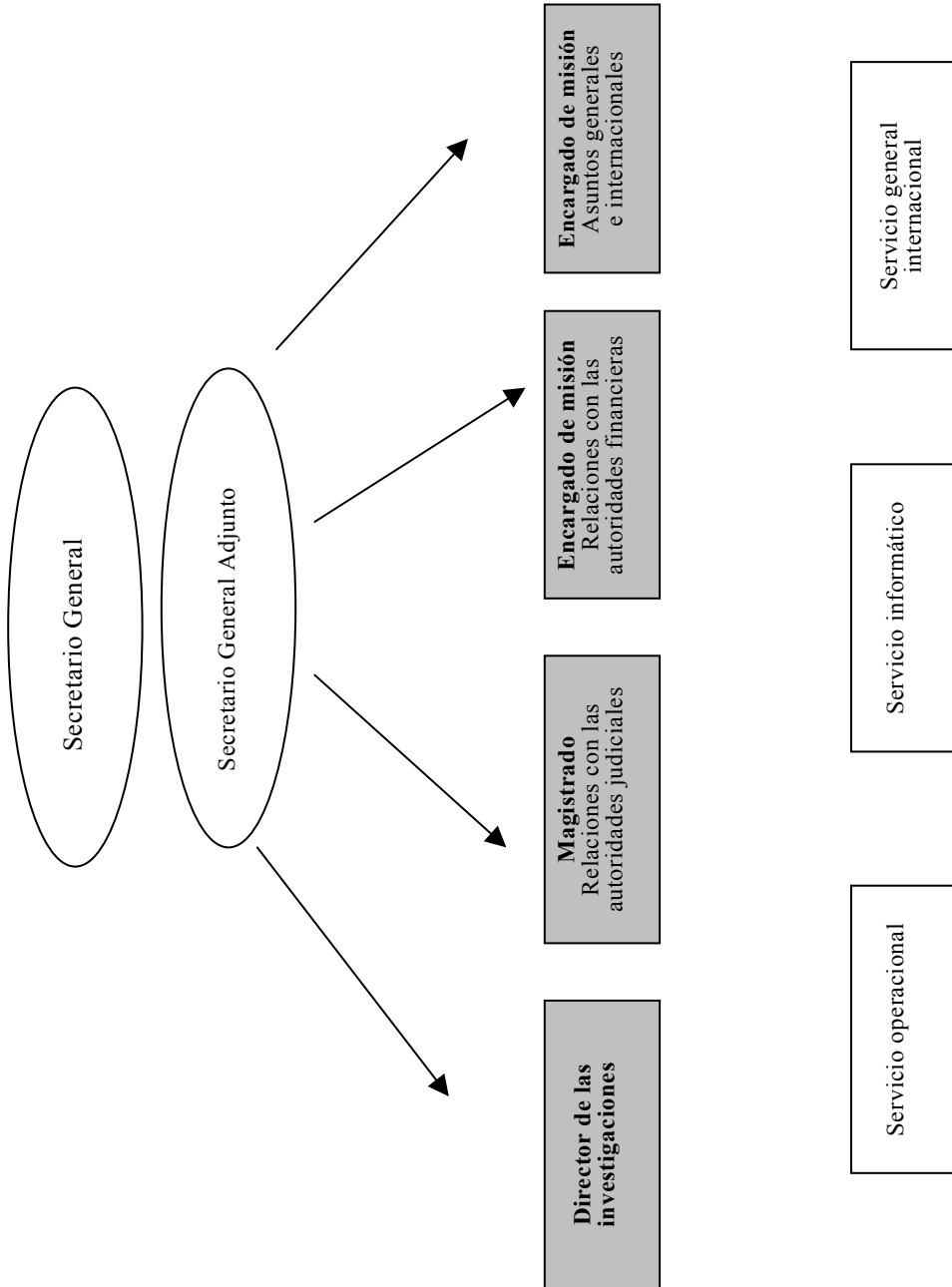
Cuando a raíz del peritaje financiero se llega a la presunción de que ha habido blanqueo de capitales o financiación de una actividad terrorista, se ponen los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

## Organización

Bajo la autoridad de un Secretario General y de un Secretario General Adjunto, participan en el marco y en el desarrollo del servicio un magistrado, el director de las investigaciones encargado de la fase operacional y dos encargados de misión (asuntos generales e internacionales, por una parte, y relaciones con las autoridades financieras, por otra).

(Véase el organigrama que figura a continuación)

## Organnigrama



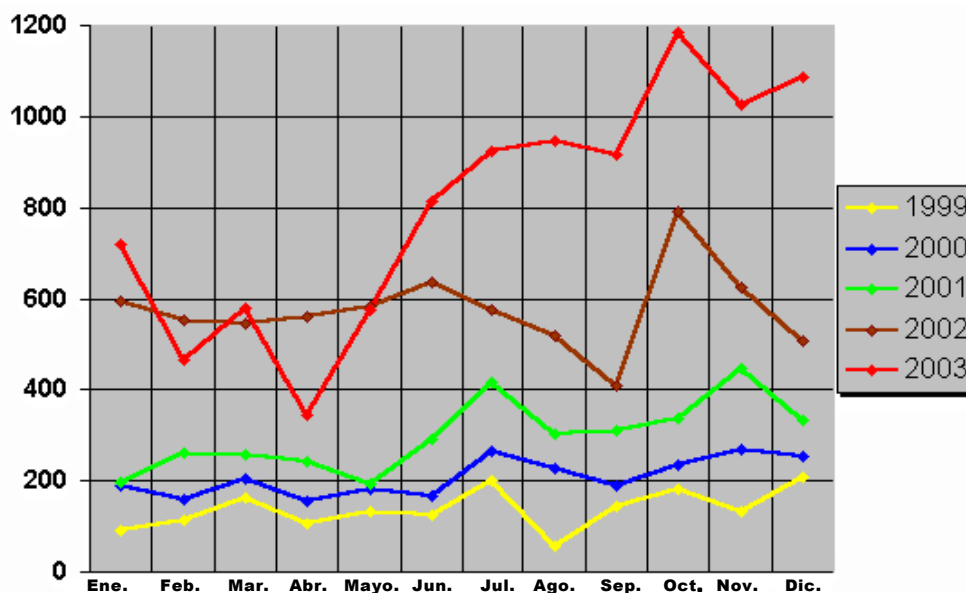
### Los agentes

El TRACFIN consta, en la actualidad, de 48 funcionarios del Estado (de los que 33 están encargados del análisis operacional, que constituye el núcleo de la red), procedentes de diversas administraciones, en particular financieras (Dirección General de Aduanas, servicios descentralizados del Tesoro). En estos efectivos figuran también dos oficiales facilitados, respectivamente, por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en 2002 y 2003. Esta dimensión pluridisciplinaria permite, gracias a perspectivas diferentes, reforzar las capacidades periciales y desarrollar una sinergia entre los servicios.

### Medios presupuestarios

El costo total del funcionamiento del TRACFIN se evalúa en unos 2,6 millones de euros, cuya financiación incumbe al Ministerio de Economía, Finanzas e Industria.

Su actividad está en constante aumento desde su creación en 1991, como se ve en el gráfico siguiente, que presenta la evolución del número de declaraciones registradas en los cinco últimos años.



Esta progresión ha ido siempre acompañada de los medios humanos y materiales adecuados: de este modo, además del refuerzo progresivo de sus efectivos (15 agentes en 1991 en comparación con 48 al 1º de enero de 2004), el servicio se instaló en marzo de 2003 en nuevos locales más funcionales y que ofrecían mayor seguridad.

- 1.3 Según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1 de la resolución, todos los Estados deben congelar los fondos y demás activos financieros o recursos vinculados al terrorismo. ¿Existe en Francia una autoridad o un organismo especialmente encargado de la incautación y confiscación de los activos vinculados al terrorismo? En caso afirmativo, sírvase ofrecer al Comité una reseña del soporte legal de esa autoridad o ese organismo, así como una descripción general de sus funciones. Sírvase precisar, además, la amplitud financiera de los activos congelados.**

La Dirección del Tesoro, del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria procede a congelar los activos financieros y los recursos económicos de quienes cometen o intentan cometer actos de terrorismo.

#### **Estadísticas**

	<i>Congelación</i>	<i>Confiscación</i>
1992	Ninguna	Ninguna
...		
2001	4 420 000 euros	Ninguna
2002	2 835 euros	Ninguna
2003	27 362 euros	Ninguna

El importe indicado en 2001 corresponde a los activos mantenidos por las entidades previstas en el Reglamento (CE) No. 337, de 14 de febrero de 2002, aprobado para aplicar la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las medidas de congelación se levantaron a raíz de la aprobación del reglamento (CE) No. 362/2002 de 27 de febrero de 2002, y del reglamento (CE) No. 105/2002, de 18 de enero de 2002.

Por otra parte, cabe destacarse que estos datos han de completarse por los importes congelados en aplicación de procedimientos judiciales.

En lo que respecta a las medidas nacionales destinadas a reforzar las capacidades institucionales de lucha contra la financiación del terrorismo, cabría mencionar la creación, en el seno del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, en 2001, de FINATER, que es una estructura especial de colaboración entre direcciones. En efecto, esta estructura permite un intercambio de informaciones entre los servicios movilizados en la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y el terrorismo, asociando al servicio de aduanas, que presta las funciones de secretaría, el TRACFIN (red de tratamiento de los circuitos financieros clandestinos que puedan estar vinculados a la criminalidad organizada y servicio de peritaje contra el blanqueo de capitales creado por decreto de 9 de mayo de 1990), los organismos de supervisión (Comisión Bancaria) y la Dirección del Tesoro.

- 1.4 Conforme a lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 1 de la resolución, todos los Estados deben adoptar disposiciones legales para reglamentar las actividades de las entidades no financieras que efectúen transferencias de fondos y las redes bancarias no estructuradas. Se indica en el segundo informe (páginas 6 y 7) que “las actividades bancarias no estructuradas son ilegales en Francia” y que “sólo las personas jurídicas reconocidas**



**como establecimiento de crédito pueden realizar operaciones bancarias”. El Comité desearía saber el número de entidades o de agentes que prestan servicios de transferencia de fondos y que están registrados o tienen la autorización de ejercer en Francia.**

En aplicación del artículo L.511-10 del Código Monetario y Financiero, los establecimientos de crédito deben obtener la autorización del Comité de establecimientos de créditos y empresas de inversión para poder ejercer sus actividades. Entre las operaciones de banca, definidas en el artículo L.311.1 del Código Monetario y Financiero y sujetas a autorización, figura la puesta a disposición de la clientela o la gestión de cualquier instrumento que permita a cualquier persona transferir fondos, cualquiera que sea el medio o el procedimiento técnico utilizado. Según datos del Comité de establecimientos de crédito y empresas de inversión, al 31 de diciembre de 2003 había en Francia un total de 492 establecimientos de crédito autorizados a efectuar operaciones de transferencias de fondos, de los cuales:

- 446 establecimientos de crédito autorizados a efectuar cualquier operación de banca (entre ellos los bancos, bancos de mutualidades y cooperativas, cajas de crédito municipal y sucursales de establecimientos del Espacio Económico Europeo) y
- 46 sociedades financieras o instituciones financieras especializadas (categorías de establecimientos de crédito que sólo pueden realizar las operaciones de banca expresamente indicadas en su autorización o en los textos que las regulan) autorizadas a efectuar transferencias de fondos, cuatro de ellas con carácter exclusivo.

Por otra parte, cuatro instituciones públicas están autorizadas por ley a efectuar transferencias de fondos sin contar con una autorización: el Tesoro Público, el Banco de Francia, la Caja de depósitos y consignaciones y los servicios financieros de Correos<sup>1</sup>.

**1.5 Se indica en el segundo informe (página 4) que se ampliará la obligación de vigilancia (en materia de lucha contra el blanqueo de dinero para fines no financieros) a fin de incluir a los interventores de cuentas, expertos contables externos, asesores fiscales, notarios, abogados y otros miembros de profesiones jurídicas independientes cuando se transponga en derecho francés la directiva correspondiente del Parlamento Europeo, de aquí a junio de 2003. El Comité desearía recibir un informe sobre la situación a este respecto y una breve reseña de la aplicación de esas disposiciones.**

La directiva europea No. 2001/97/CE de 4 de diciembre de 2001 ha sido transpuesta en derecho nacional por el artículo 70 de la Ley No. 2004-130, de 11 de febrero de 2004, que reforma el estatuto de determinadas profesiones judiciales o jurídicas, de expertos judiciales, de asesores en propiedad industrial y de expertos en subastas.

Dicha ley amplía la obligación de declaración de sospecha enunciada en el artículo L.562-2 del Código Monetario y Financiero a las sumas y operaciones sospechosas que pudieran provenir del fraude a los intereses financieros de las Comunidades europeas y de la corrupción.

<sup>1</sup> Véanse los particulares en el anexo II.

La ley amplía igualmente la lista de las profesiones sujetas a la obligación de declaración de sospecha prevista en el artículo L.562.1 del Código Monetario y Financiero a los profesionales y sociedades siguientes:

- Expertos contables e interventores de cuentas;
- Notarios, auxiliares de administración de justicia, administradores judiciales y mandatarios judiciales en la liquidación de empresas, así como abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación y abogados y procuradores de los tribunales de apelación (en las condiciones previstas en el artículo L.562-2-1)
- Peritos tasadores judiciales y sociedades de ventas voluntarias de muebles en las subastas públicas.

Los notarios, auxiliares de administración de justicia, administradores judiciales y mandatarios judiciales en la liquidación de empresas así como los abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación y los abogados y procuradores de los tribunales de apelación están obligados a efectuar la declaración prevista en el artículo L.562-2 cuando, en el marco de sus actividades profesionales, realicen, en nombre y por cuenta de su cliente, cualquier transacción financiera o inmobiliaria o participen, ayudando a su cliente, en la preparación o realización de transacciones con respecto a:

- La compraventa de bienes inmuebles o fondos de comercio;
- La gestión de fondos, títulos u otros activos que pertenezcan al cliente;
- La apertura de cuentas bancarias, de ahorro o de títulos;
- La organización de las aportaciones necesarias para la creación de sociedades;
- La constitución, gestión o dirección de sociedades;
- La constitución, gestión o dirección de fondos fiduciarios de derecho extranjero o de cualquier otra estructura análoga.

La obligación de declaración de sospecha no se aplica cuando, en el ejercicio de las actividades relativas a las transacciones anteriormente indicadas y en la evacuación de consultas jurídicas por expertos contables conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la orden No. 45-2138 de 19 de septiembre de 1945, relativa a la institución del cuerpo de expertos contables y la reglamentación de su título y profesión, se reciban informaciones de un cliente o se obtengan sobre él, en el marco de una consulta jurídica, salvo si ésta tiene por fin el blanqueo de capitales o si esas personas proceden a ella sabiendo que su cliente desea obtener asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales, o bien en el ejercicio de las actividades que realicen en interés de ese cliente, cuando tal actividad concierna a un procedimiento jurisdiccional, con independencia de que dichas informaciones se hayan recibido antes del procedimiento, durante éste o después de éste, incluso si se trata de consejos para iniciar o evitar tal procedimiento.

Además, como excepción al artículo L.562-2, los abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación, y los abogados o procuradores de los tribunales de apelación deben comunicar la declaración, según el caso, al Presidente del Colegio de Abogados, al Consejo de Estado y al Tribunal de Casación, al Decano

del Colegio al que esté afiliado el abogado o al presidente de la compañía de que dependa el procurador.

Esas autoridades transmiten al servicio establecido en el artículo L.562-4, en los plazos y según las modalidades de procedimiento definidos en decreto aprobado en el Consejo de Estado, la declaración que les haya remitido el abogado o procurador, salvo si consideran que no hay sospecha de blanqueo de capitales. En ese caso, el Presidente del Colegio de Abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación, el Decano del Colegio a que esté afiliado el abogado o el presidente de la compañía de que dependa el procurador informan al abogado o al procurador de los motivos por los que ha estimado que no debía transmitir las informaciones que éste le había comunicado. El Decano del Colegio o el presidente de la compañía que haya recibido una declaración y no la haya comunicado al servicio establecido en el artículo L.562-4 transmite las informaciones contenidas en esa declaración al Presidente del Consejo nacional de colegios de abogados o al Presidente de la Cámara Nacional de Procuradores. Dicha transmisión no incluye elementos relativos a la identificación de las personas.

En estas mismas condiciones, el Presidente del Colegio de Abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación y el Presidente de la Cámara Nacional de Procuradores presentan un informe al Ministro de Justicia, con la periodicidad definida por decreto aprobado en el Consejo de Estado, acerca de las situaciones que no hayan dado lugar a la comunicación de declaraciones. El Ministro de Justicia remite esas informaciones al servicio establecido en el artículo L.562-4.

Por último, los abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación y los abogados y procuradores de los tribunales de apelación están autorizados a revelar a su cliente la existencia de una declaración que les afecte (artículo L.574-1 modificado).

Además, conviene subrayar que el campo abierto por el dispositivo de la declaración de sospecha viene completado por el de la “declaración de certidumbre”, prevista en el artículo 561.1 del Código Monetario y Financiero, que prevé que las personas distintas de las mencionadas en el artículo L.562-1 que realicen o controlen operaciones que supongan movimientos de capitales o asesoren al respecto están obligadas a declarar al Fiscal General del Estado las operaciones concernientes a sumas de las que tengan conocimiento que provienen del tráfico de estupefacientes, actividades criminales organizadas, fraude a los intereses financieros de las Comunidades Europeas o corrupción o que pudieran participar en la financiación del terrorismo.

Los ejemplos dados para ilustrar las profesiones a que se aplica, en su defecto, la declaración de certidumbre no son ya de actualidad a raíz de la entrada en vigor de la ley de 11 de febrero de 2004, que menciona precisamente de modo explícito a los notarios (que, por otra parte, estaban ya incluidos en el dispositivo de la declaración de sospecha en su calidad de intermediarios inmobiliarios, desde la Ley No. 98-546, de 2 de julio de 1998) y a los expertos contables. El ejemplo de los “suministradores de servicios a las sociedades”, recogido en las 40 recomendaciones revisadas que aprobó el Grupo Especial de Expertos Financieros en junio de 2003, está más adaptado a este respecto, dado el estado actual de la legislación nacional.

**1.6 El Comité desearía recibir informaciones sobre las cuentas que se han congelado por los presuntos vínculos con la financiación de actividades terroristas.**

Sírvase remitir a los elementos presentados en respuesta a la pregunta 1.3.

**1.7 La aplicación efectiva de lo dispuesto en el apartado e) del párrafo 2 de la resolución supone que todos los Estados deben adoptar medidas para hacer comparecer ante los tribunales a los terroristas y a sus simpatizantes. Francia ha impartido a las autoridades administrativas, a las autoridades encargadas de las investigaciones y los enjuiciamientos y a los magistrados una formación especial para aplicar las leyes vigentes, que se centra en los siguientes aspectos:**

- Tipología y tendencias que permitan hacer frente a los métodos y técnicas de financiación del terrorismo;
- Técnicas de identificación del origen de los bienes que son producto de una infracción o deben servir para la financiación de actos de terrorismo, con miras a su congelación, incautación o confiscación.

La Dirección General de la Policía Nacional y la Dirección General de la Gendarmería Nacional desarrollan, desde 1990, actividades de formación en las técnicas de investigación en materia de lucha contra el blanqueo de dinero respecto del conjunto de funcionarios encargados de las investigaciones y enjuiciamientos en esta materia. Desde 2000, estas actividades de formación abarcan las cuestiones de la financiación del terrorismo. Se llevan a cabo actividades análogas respecto de los magistrados, ya se trate de su formación inicial en la Escuela Nacional de la Magistratura o dentro del marco de la formación continua para los magistrados que deben tratar asuntos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Paralelamente, se realizan actividades conjuntas de sensibilización de las profesiones sujetas a la obligación de vigilancia (véase la respuesta *supra*), por los servicios de investigación (OCRGDF), de información financiera (TRACFIN) y el sector bancario (gestores de riesgos).

Además, la Escuela Nacional de la Magistratura organiza, dentro del marco de la formación continua de los magistrados del cuerpo judicial, sesiones de formación y seminarios relativos al terrorismo, al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo.

De este modo, en diciembre de 2003, la Escuela Nacional de la Magistratura organizó un seminario francoespañol al que asistieron magistrados de ambos países, dedicado a la lucha contra el terrorismo. La cooperación judicial internacional, el análisis de los métodos de investigación, la constitución de equipos comunes de investigación en los asuntos de terrorismo y la lucha contra la financiación del terrorismo han sido los principales temas del programa de esta acción de formación común.

Por otra parte, los magistrados franceses tienen la posibilidad de participar en ciclos de formación en derecho penal, económico y financiero, en uno de los cuales intervienen investigadores de la gendarmería nacional, que les permite en particular familiarizarse con los métodos de blanqueo de capitales y las técnicas de investigación destinadas a poner freno a este fenómeno.

## Eficacia del mecanismo de represión del terrorismo

**1.8 La aplicación efectiva de lo dispuesto en el apartado e) del párrafo 2 de la resolución exige que todos los Estados tomen medidas para enjuiciar a los terroristas y quienes los apoyen. ¿Dispone Francia de programas para proteger de las intimidaciones de los terroristas a los jueces, los representantes de la ley, los testigos y las personas dispuestas a facilitar información? De ser así, sírvanse informar al Comité sobre el particular.**

Una serie de disposiciones legales, cuyo funcionamiento se describe a continuación, garantizan la protección de los jueces, los representantes de la ley, los testigos y las personas dispuestas a facilitar información en el marco de procedimientos penales incoados contra terroristas.

### Protección de los jueces

#### *– Protección física de los jueces encargados de la lucha contra el terrorismo*

Los seis jueces adscritos a la sección de lucha contra el terrorismo de la fiscalía de París disfrutan de protección policial permanente (el jefe de la sección) o durante la semana en que están de guardia (los demás jueces de la sección). En cuanto a los seis jueces de instrucción especializados en la lucha contra el terrorismo, gozan de protección las 24 horas del día.

#### *– Protección durante el enjuiciamiento de delitos de terrorismo*

Durante el enjuiciamiento de terroristas se toman medidas de protección específicas.

Antes de que comiencen los procedimientos se celebran reuniones, la mayoría de las veces en el Tribunal de Apelación de París y en los demás casos en el Tribunal de Apelación o el órgano judicial que se trate, en las que participan representantes de la presidencia del tribunal y de la fiscalía general, el Presidente del Tribunal Penal, el Abogado General, representantes de la Prefectura de policía, de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Terrorismo (UCLAT), de la institución penitenciaria donde se encuentren los acusados y de la comandancia militar del palacio de justicia de París o su equivalente local.

Los representantes de la UCLAT informan de cualquier acción violenta que, según los datos obrantes en su poder, pudiera tener lugar con ocasión de ese procedimiento. Para trasladar a los acusados se utiliza un dispositivo policial reforzado en el que frecuentemente participan los servicios de la Prefectura de policía de París.

En cuanto a la seguridad en la sala de vistas, se patrullan sus inmediaciones, utilizando, en ocasiones, equipos de perros.

Además, por regla general, existe el habitual dispositivo de portales de detección y de registro de efectos personales.

En cuanto a la seguridad de los magistrados, el Presidente del Tribunal Penal y el Abogado General pueden recibir protección especial si la UCLAT lo juzga oportuno a tenor del riesgo que corran. Además, existe un procedimiento de acreditación para los periodistas. Por último, las partes civiles a menudo disponen de accesos especiales al palacio de justicia y a la sala de vistas.

– *Protección penal de los jueces y otros funcionarios públicos*

El Código Penal francés contempla una circunstancia agravante que eleva la pena con que se castiga una infracción cuando ésta se dirige a jueces, jurados, abogados, funcionarios públicos o ministeriales, miembros de la gendarmería, funcionarios de la policía nacional, del servicio aduanero o de la administración penitenciaria o a cualquier otra persona investida de autoridad pública o que ejerza funciones públicas, con el ánimo de influir en su comportamiento durante el desempeño de sus funciones o de su cometido. En particular, esta norma se aplica a los delitos de administración de sustancias nocivas, destrucción y estragos, envenenamiento, asesinato, tortura o actos de barbarie y violencia.

Asimismo, existen tipos penales específicos destinados a proteger a los jueces y a los demás funcionarios públicos.

Así, el artículo 433-3 del Código Penal castiga con dos años de prisión y multa de 30.000 euros a quienes amenacen con cometer un delito contra la integridad física o los bienes de un juez, un jurado, un abogado, un funcionario público o ministerial, un miembro de la gendarmería, un funcionario de la policía nacional, del servicio aduanero o de la administración penitenciaria o cualquier otra persona investida de autoridad pública, cuando las funciones que ejerza la víctima sean aparentes o conocidas por el autor. Estas disposiciones también se aplicarán cuando las amenazas se dirijan al cónyuge, los ascendientes o los descendientes en línea directa de esas personas por motivo de las funciones que ejercen o a cualquier otra persona que resida habitualmente en su domicilio.

Si la amenaza es de muerte o se dirige contra los bienes de una persona, poniendo también en peligro su integridad física, la pena se elevará a cinco años de prisión y multa de 75.000 euros.

El que se sirva de amenazas, violencia o actos de intimidación para obligar a esas personas a realizar un acto que entre dentro de sus funciones, su cometido o su mandato, o a abstenerse de él, o a abusar de su autoridad, real o supuesta, para obtener una decisión favorable será castigado con una pena de 10 años de prisión y multa de 150.000 euros.

Asimismo, el artículo 434-8 del Código Penal castiga con una pena de tres años de prisión y multa de 45.000 euros a quienes amenacen o intimiden a un juez, un jurado, cualquiera de los integrantes de un órgano jurisdiccional, un árbitro, un intérprete, un perito o el abogado de una parte con el ánimo de influir en su comportamiento durante el desempeño de sus funciones.

**Protección de los representantes de la ley**

Además de lo indicado en la respuesta que figura en el párrafo anterior, el artículo 62-1 del Código de procedimiento penal dispone que los funcionarios y agentes de la policía judicial que participen en un procedimiento podrán declarar como domicilio la dirección del centro de que dependan.

La Ley de 9 de marzo de 2004, por la que se adaptan los medios materiales de la justicia a la evolución de la delincuencia, ha introducido en el Código de procedimiento penal los artículos 706-81 a 706-87, que permiten a los servicios de la policía realizar actividades de infiltración. El funcionario o agente de la policía infiltrado podrá utilizar una identidad distinta de la suya, cuya revelación será castigada

con penas de prisión de hasta 10 años si provoca la muerte del agente o de miembros de su familia, así como cometer determinadas infracciones previstas en la ley, de las que no será penalmente responsable, cuando sean necesarias para facilitar su infiltración.

### **Protección de testigos**

El artículo 434-15 del Código Penal castiga con tres años de prisión y multa de 45.000 euros a quienes durante un procedimiento se sirvan de promesas, ofertas, obsequios, presiones, amenazas, vías de hecho, argucias o artificios para obligar a otro a hacer una declaración, prestar testimonio o realizar cualquier otra manifestación falsa o a abstenerse de ello.

La protección de los testigos se regula en los artículos 706-57 y 706-63 del Código de procedimiento penal. Previa autorización del fiscal o del juez de instrucción, los testigos podrán declarar como domicilio la dirección de la comisaría o de la brigada de la gendarmería.

Cuando se trate de un delito castigado con una pena de prisión superior a tres años y la toma de declaración de un testigo pueda poner en peligro su vida, su integridad física o la de los miembros de su familia, el juez competente para ordenar la detención podrá autorizar que esa persona preste declaración a puerta cerrada y que su identidad no figure en los autos. La identidad y el domicilio de la persona en cuestión se incluirán en una pieza aparte.

La revelación de la identidad y el domicilio de un testigo se castigan con una pena de cinco años de prisión y multa de 75.000 euros.

Existe la posibilidad de organizar careos entre el autor de un delito y un testigo mediante dispositivos técnicos que impidan identificar la voz de este último.

### **Protección de personas dispuestas a facilitar información**

El nuevo artículo 706-63-1 del Código de procedimiento penal dispone que quienes se benefician de exenciones o de reducciones de penas por haber contribuido a impedir la comisión de un delito, evitar o atenuar el daño provocado por él o identificar a los autores o cómplices y a sus colaboradores podrán acogerse a medidas de reinserción y de protección de su seguridad. También podrán utilizar una identidad distinta de la propia.

La revelación de esa identidad podrá ser castigada con una pena de prisión de hasta 10 años si provoca la muerte de esa persona o de uno de sus familiares.

Las medidas de protección y reinserción las decide una comisión nacional, que también establece las obligaciones que deben cumplirse y supervisa su respeto.

### **1.9 El Comité agradecería que se le remitiera un informe sobre los avances en la ratificación y aplicación de la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, cuyo texto, según se indica en la página 11 del tercer informe de Francia, ha sido sometido a la Asamblea Nacional para su examen.**

La aprobación de la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos,

fue autorizada mediante la Ley No. 2003-556 de 26 de junio de 2003. Francia depositó su instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 26 de agosto de 2003.

**1.10 La aplicación efectiva de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la resolución exige que los Estados tipifiquen como delito la financiación del terrorismo y velen por el enjuiciamiento de quienes participen en actividades terroristas. ¿Podría Francia indicar al Comité el número de personas procesadas por los siguientes motivos:**

- Actividades terroristas;
- Financiación de actividades terroristas;
- Apoyo a terroristas o a organizaciones terroristas.

El Comité desearía saber cuántas de estas personas han sido procesadas por haber contribuido a apoyar, incluso mediante actividades de reclutamiento, a:

- Organizaciones prohibidas; y
- Otros grupos u organizaciones terroristas.

Las estadísticas de que dispone el Ministerio de Justicia no permiten informar al Comité del número de personas “enjuiciadas” mientras no recaiga sobre ellas una condena penal. Sólo las condenas se inscriben en el registro nacional de penados y rebeldes.

a) Las condenas dictadas en Francia por infracciones que entran dentro de la definición de “actos de terrorismo” (en la que se incluyen 16 tipos penales diferentes) entre 1992 y 2003 son las siguientes:

1992	6	1998	54
1993	8	1999	110
1994	9	2000	124
1995	12	2001	65
1996	7	2002	53
1197	6		

b) En el derecho francés, los actos de “financiación de actividades terroristas” sólo están tipificados como delitos autónomos desde la Ley de 15 de noviembre de 2001. Por consiguiente, en caso de que existan investigaciones penales en curso por esta infracción concreta, éstas aún no se han traducido en condenas.

c) En cuanto a los hechos que pueden calificarse de “apoyo a terroristas o a organizaciones terroristas”, es difícil dar una respuesta exhaustiva al Comité, ya que los datos del registro nacional de penados y rebeldes no permiten individualizar dentro del número total de condenas dictadas las que se basan, total o parcialmente, en la complicidad. No obstante, el concepto de “apoyo” puede identificarse parcialmente con el de complicidad.



Asimismo, dependiendo de las características propias de cada asunto concreto, las condenas dictadas por determinados delitos podrían considerarse actos de “apoyo” a organizaciones terroristas.

No obstante, algunos tipos penales autónomos entran dentro del ámbito de los comportamientos que implican un “apoyo” a terroristas u organizaciones terroristas. Así sucede en los siguientes casos:

- Actos de apología directa y pública del terrorismo;
- Participación en una asociación ilícita con el ánimo de preparar actos de terrorismo;
- Participación en la reconstitución o el mantenimiento de una asociación o grupo disuelto.

En relación con estas tres categorías (que, una vez más, no representan todas las condenas dictadas por prestar apoyo a organizaciones terroristas), el número de condenas recaídas entre 1998 y 2002 es el siguiente:

1998	41
1999	80
2000	97
2001	46
2002	44

Por último, la imposibilidad de justificar recursos o “proxenetismo del terrorismo” también puede incluirse dentro de la categoría de “apoyo” a actividades terroristas. Sin embargo, este tipo penal (que permite castigar a quienes, poseyendo recursos que no se correspondan con su nivel de vida, no puedan justificarlos y mantengan relaciones habituales con una o varias personas que hayan cometido actos de terrorismo) fue introducido recientemente mediante la Ley de 18 de marzo de 2003, por lo que no existen datos sobre posibles procedimientos incoados por este motivo.

#### **Eficacia de los controles aduaneros, fronterizos y de inmigración**

**1.12 La aplicación efectiva de los párrafos 1 y 2 de la resolución exige que los Estados tomen las medidas necesarias para prevenir los actos de terrorismo. Lo dispuesto en el apartado g) del párrafo 2 tiene por objeto impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas imponiendo controles eficaces de aduanas y fronteras para impedir y reprimir la financiación de actividades terroristas. ¿Controla Francia la circulación transfronteriza de dinero en efectivo, instrumentos negociables y piedras y metales preciosos (mediante la obligación de declarar esos movimientos o de obtener una autorización previa para realizarlos, por ejemplo)? El Comité agradecería que se le facilitara información sobre cualquier limitación de carácter monetario o financiero a este respecto.**

La administración aduanera participa de varias formas en las actividades internacionales de lucha contra el terrorismo, especialmente en el marco de las obligaciones previstas en las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En efecto, dada su posición estratégica, que le permite observar y controlar los flujos transfronterizos de personas, bienes y capitales, las facultades de que dispone y la importante función que desempeña la información en sus actividades diarias, la administración aduanera está en condiciones de tomar múltiples medidas para detener a los autores de esos actos y apoderarse de sus medios logísticos y sus posibles fuentes de financiación.

Tomando como referencia sus misiones anteriores, las actividades de la administración francesa de aduanas en este ámbito consisten en actuaciones en materia de lucha contra la financiación del terrorismo (I) y en un dispositivo reforzado de obtención y procesamiento de información especialmente útil para descubrir la posible utilización con fines terroristas de los beneficios derivados de actividades cuyo control o represión entra dentro de sus competencias (II).

#### *I. Plan de acción aduanero en materia de lucha contra el terrorismo*

Es lógico que la administración aduanera, que participaba ya en las estructuras y las actividades de lucha contra el blanqueo de dinero, haya sido incluida junto a otras seis administraciones o servicios del Ministerio de Economía y Hacienda en un nuevo grupo de lucha contra la financiación del terrorismo (FINATER), creado el 27 de septiembre de 2001.

Este órgano, que desde entonces se reúne periódicamente, tiene por objeto estrechar la cooperación entre los diversos actores competentes en materia de identificación de los grandes tráfico, transparencia de las cuentas, lucha contra el blanqueo de dinero y relaciones entre los distintos tipos de tráfico.

En efecto, la administración aduanera dispone de instrumentos jurídicos que le permiten participar activamente en la lucha contra la financiación del terrorismo, en relación con el cual ha elaborado un plan de acción específico que se basa principalmente en los siguientes ejes de actuación.

##### *Control de la eficacia de las medidas de congelación de activos y sanción en caso de incumplimiento*

Los agentes aduaneros están facultados desde 1945 para investigar, comprobar y denunciar las infracciones de la legislación sobre relaciones financieras con el extranjero. Por lo tanto, los agentes aduaneros pueden servirse de las facultades y las disposiciones administrativas previstas en el Código aduanero para supervisar las medidas de congelación de activos que entren dentro del ámbito de la legislación sobre relaciones financieras con el extranjero.

Además de la posibilidad de visitar personas e inspeccionar vehículos y bienes, los agentes aduaneros pueden realizar visitas domiciliarias (artículo 64 del Código aduanero) y solicitar la entrega de documentos en virtud de las siguientes disposiciones:

- El artículo 65 del Código aduanero —Derecho de los agentes aduaneros a solicitar información general—, que les permite recabar “certificados y documentos de todo tipo relativos a las operaciones que incumban al servicio y obren en poder de personas físicas o jurídicas que tengan un interés directo en las operaciones regulares o irregulares de competencia del servicio aduanero”; y

- El artículo 152.3 del Código Monetario y Financiero —Derecho de las administraciones fiscales a solicitar información— que, por su parte, permite pedir a las entidades de crédito y otros servicios interesados información sobre “la fecha, el importe de las cantidades transferidas al extranjero, la identidad del autor y el beneficiario de las transferencias, y las cuentas de que se trate en Francia y el extranjero. Estas disposiciones se aplicarán también a las transferencias a cuentas de no residentes efectuadas por cuenta de esas personas”.

La Dirección Nacional de Información e Inspección Aduanera, órgano de la administración aduanera que dispone de competencias exclusivas en la materia, realiza sus inspecciones utilizando como referencia las respuestas a los cuestionarios que el Fichero Nacional de Cuentas Bancarias (FICOPA) compila por indicación de la Dirección General de Impuestos (Dirección Nacional de Inspección Fiscal).

*Control de la circulación transfronteriza de cantidades en efectivo, títulos o valores*

Desde el 1º de enero de 1990, cualquier persona física que transfiera entre Francia y el extranjero cantidades en efectivo, títulos o valores por un importe igual o superior a 7.600 euros deberá realizar la correspondiente declaración al servicio aduanero (artículo 464 del Código aduanero).

*Artículo 464*

“Las personas físicas que transfieran al extranjero o reciban de éste cantidades en efectivo, títulos o valores sin la intervención de un organismo sujeto a la Ley No. 84-46 de 24 de enero de 1984, por la que se controlan y regulan las actividades de las entidades de crédito, o de un organismo de los que figuran en el artículo 8 de dicha ley, deberán realizar la correspondiente declaración en los términos que se establezcan por decreto. Deberán declararse todas las transferencias que superen los 7.600 euros.”

Las cantidades en efectivo, los títulos y los valores sujetos a declaración son el dinero en efectivo, los cheques, los créditos endosables de todo tipo y los lingotes y piezas de oro o plata que coticen en un mercado oficial.

El incumplimiento de esta obligación constituye un delito que será castigado con la confiscación de la cantidad de que se trate o, cuando no pueda practicarse el embargo, de una cantidad equivalente y con una multa por valor, como mínimo, de la cuarta parte del importe a que se refiera la infracción y, como máximo, igual a dicho importe (artículo 465 del Código aduanero).

Esta obligación de declarar es especialmente relevante en el marco de la lucha global e integrada que se libra contra la financiación del terrorismo y su interés se ve además corroborado por:

- Los importantes movimientos transfronterizos que permite poner al descubierto. En el año 2003, los servicios aduaneros detectaron 1.722 infracciones de la obligación de declarar cantidades en efectivo, títulos o valores, por un total de cerca de 145 millones de euros. En ese mismo período, los viajeros presentaron espontáneamente 24.485 declaraciones, por un importe de 958 millones de euros.

- La certeza de que las redes terroristas utilizan sistemas de “microfinanciación”, basados en la percepción de fondos o donaciones que circulan, de manera privilegiada, por circuitos financieros no bancarios.

#### *Control del oro, las piedras preciosas y otros bienes análogos*

La legislación por la que se regula la circulación de cantidades en efectivo, títulos o valores incluye en su ámbito de aplicación el oro monetario (lingotes y piezas) y las piezas de plata. Esta legislación no se aplica a otros valores de este tipo porque se consideran bienes que, como cualquier otro, están sujetos a la legislación aduanera. La importación o exportación de esos bienes puede ser supervisada por la administración de aduanas ya que está sujeta a una declaración aduanera.

Asimismo, debe recordarse que Francia es parte en el “Proceso de Kimberley”, dispositivo que pretende evitar la introducción en el mercado lícito de diamantes de origen dudoso cuya venta podría utilizarse para adquirir material de guerra por las facciones que luchan en el África austral, perpetuando así ciertos conflictos regionales. Aunque este dispositivo se refiere ante todo al seguimiento de los diamantes en bruto producidos en esa región del mundo, también puede servir para que las transacciones se ajusten a ciertos criterios morales, evitando que piedras vendidas para financiar otras actividades ilícitas, delictivas o no, lleguen a los mercados.

#### *Control de las actividades de los cambistas*

La administración aduanera también se encarga de controlar las oficinas de cambio por cuenta de la Comisión bancaria. La Dirección Nacional de Información e Inspección Aduanera realiza esos controles basándose en un plan de control anual elaborado en colaboración con la Comisión bancaria y el organismo encargado de la información y la adopción de medidas contra los circuitos financieros clandestinos (TRACFIN).

## *II. Medidas ordinarias de lucha contra la financiación del terrorismo adoptadas por los servicios aduaneros*

- Con carácter general, el ejercicio ordinario de las competencias atribuidas a la administración aduanera francesa en materia de lucha contra los tráficó ilícitos contribuye al logro de este objetivo prioritario. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en su resolución 1373 (2001) de 28 de septiembre de 2001, observó con preocupación la conexión que existe entre el terrorismo internacional, la delincuencia organizada, el tráfico de droga, el blanqueo de dinero y el contrabando de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales.

Esta imbricación entre el terrorismo internacional y los ámbitos de actuación de las administraciones aduaneras también se ve confirmada por la presunta utilización que las organizaciones delictivas hacen de los beneficios procedentes de operaciones aduaneras irregulares (contrabando de tabaco, de alcohol, etc.) para financiar otras actividades ilícitas, entre las que no puede excluirse el terrorismo.

- El dispositivo reforzado de obtención y procesamiento de información sobre la lucha contra el terrorismo creado a raíz de los atentados del 11 de septiembre tiene como principal objetivo poner al descubierto esas relaciones en todos los

ámbitos que son competencia de la administración aduanera (tráfico de estupefacientes y armas, contrabando de tabaco, falsificaciones, etc.).

Además de instar a todos los servicios a que mantengan una actitud vigilante, se ha creado un grupo especializado en el seno de la Dirección Nacional de Información e Inspección Aduanera encargado de analizar y procesar la información que resulte de las actividades de supervisión, o de meras sospechas, de los servicios aduaneros en su conjunto.

Para enervar o confirmar las presunciones sobre la existencia de vínculos con las redes terroristas, este grupo mantiene estrechos contactos con los servicios de información, tanto franceses como extranjeros, a través de la red de agregados en asuntos aduaneros.

**1.13 A tenor del párrafo 2 de la resolución, los Estados deben impedir la circulación de los terroristas y denegarles refugio. En lo que respecta a los vuelos internacionales, ¿compara Francia los datos que figuran en las listas de pasajeros con los contenidos en las bases de datos de los servicios de lucha contra el terrorismo para controlar antes del aterrizaje a los pasajeros que se dirijan a su territorio?**

Los datos que figuran en las listas de pasajeros de los vuelos internacionales sólo se comparan con los contenidos en las bases de datos de los servicios de lucha contra el terrorismo para controlar a los pasajeros antes del aterrizaje (o despegue) de su avión cuando existe una presunción o una amenaza grave de atentado.

En tales casos, los datos obtenidos por los servicios de lucha contra el terrorismo se centralizan en la UCLAT, comunicándose, en su caso, a sus homólogos en el extranjero.

**Control de los mecanismos destinados a impedir el abastecimiento de armas a los terroristas**

**1.14 Según el apartado a) del párrafo 2 de la resolución, todos los Estados Miembros deberán establecer mecanismos apropiados para, entre otras cosas, controlar y prevenir el abastecimiento de armas a los terroristas. En el primer informe (pág. 12), se señala que “Francia prevé completar próximamente su legislación mediante disposiciones relativas al control de la intermediación en la venta de armamentos”. El Comité agradecería que se le informara sobre la situación y se le describieran las disposiciones legales adoptadas para reforzar la seguridad de los almacenes de explosivos y del transporte de explosivos y armas.**

1. Francia aprobó en 2002 un primer reglamento para el control *a posteriori* de los intermediarios en la venta de armamentos que les obliga a obtener la autorización del gobierno para ejercer su actividad. También obliga a los intermediarios autorizados a llevar un registro de sus actividades y a facilitarlo a las autoridades cuando éstas lo soliciten. Hasta el momento, se han concedido autorizaciones a diez intermediarios.

Este primer instrumento debe ser completado por una ley destinada a controlar *a priori* las operaciones de intermediación en la venta de armamentos.

El proyecto de ley de intermediación, presentado al Senado en 2002, extiende a las actividades de intermediación las disposiciones del Decreto-ley de 18 de abril de 1939 y las normas adoptadas para su aplicación. Dicho proyecto obliga a todos los intermediarios que residan en Francia o tengan en ella su sede a obtener una autorización previa concedida por el Primer Ministro para realizar cualquier operación destinada a facilitar material de guerra u otros materiales conexos al extranjero.

El artículo 23-1 del proyecto define la actividad de intermediación del siguiente modo: "... cualquier actividad de carácter mercantil o lucrativa cuyo objeto sea poner en contacto a personas que deseen celebrar un contrato de compraventa de material de guerra u otros materiales conexos o celebrar un contrato de este tipo en nombre de una de las partes".

El artículo 25 del Decreto-ley de 1939 establece las penas con que se castigan las infracciones del régimen de comercio de armas, incluyendo tanto la exportación como la tenencia y la fabricación en el territorio nacional.

La pena máxima que podrá imponerse a una persona física es de cinco años de prisión y una multa de 750.000 euros. Las penas que podrán imponerse a las personas jurídicas se contienen en el artículo 131-39 del Código Penal. Tales penas incluyen la inhabilitación para el ejercicio de la actividad al amparo de la cual se haya cometido la infracción.

2. Asimismo, para proteger más eficazmente las instalaciones y el transporte de productos explosivos contra el robo y otros actos ilícitos, el Gobierno ha decidido modificar el Decreto No. 90-153 de 16 de febrero de 1990 por el que se aprueban varias disposiciones relativas al régimen de las sustancias explosivas, el Decreto No. 81-972 de 21 de octubre de 1981 sobre marcado, adquisición, entrega, tenencia, transporte y utilización de sustancias explosivas y el Decreto No. 72-828 de 1º de septiembre de 1972 por el que se reestructura la Comisión de Sustancias Explosivas. Estos proyectos de decreto, que se someterán en breve al Consejo de Estado, tienen por objeto reforzar las normas técnicas de seguridad relativas a la ordenación y el funcionamiento de las instalaciones y perfeccionar el mecanismo de concesión de las autorizaciones de explotación de las instalaciones, teniendo más en cuenta los imperativos de seguridad en la materia. Los proyectos de decreto refuerzan igualmente el control previo de la honorabilidad de los operadores y sus empleados. En cuanto a la seguridad del transporte de explosivos, se ha incorporado en la normativa la obligación de informar a los servicios de la policía y la gendarmería.

---